

Programa y mandato

JAVIER ZARZALEJOS

El alcance de los objetivos y compromisos que el nuevo Gobierno ha adquirido apunta a una responsabilidad tomada en serio

Si se leen algunas de las reacciones que están generando las comparecencias de los nuevos ministros (y ministras) en el Congreso para explicar sus proyectos, se produce la curiosa sensación de estar ante un Gobierno del que primero se decía que no tenía programa y del que ahora algunos dicen que lo tiene en exceso. Si antes se le lanzaba un reproche de inanidad a quienes habrían llegado al poder por el solo desgaste vegetativo de los socialistas, agudizado por una crisis sin precedentes, ahora la crítica consiste en decir del Gobierno del Partido Popular que se está excediendo en sus afanes reformadores.

No está mal. Sobre todo si se tiene en cuenta que ante el legado socialista no había opción para que el nuevo Gobierno se dedicara a administrar la continuidad. Poco había que continuar, como se ha hecho evidente a las primeras de cambio a cuenta de unas cifras de déficit que nos dejan en más de dos puntos alejados de los compromisos asumidos por el anterior Gobierno y fuerzan un ajuste que duplica las previsiones iniciales.

Después de casi ocho años de mayorías construidas sobre el contorsionismo político más extravagante, puede sorprender que un Gobierno se proponga llevar a cabo una oferta programática clara. Los personajes que fueron aupados a cotas de insólita influencia en la construcción política del 'zapaterismo' han vuelto a la respetable marginalidad desde la que exhibir su radicalismo. El mandato de cambio que inequívocamente expresó la sociedad española en las dos elecciones de ámbito nacional celebradas en 2011 tiene plasmación concreta.

A los que ponen el grito en el cielo por la reforma de los contenidos de la asignatura hasta ahora llamada de Educación para la Ciudadanía o a los que tachan de antidemocrático que se modifique el sistema de elección de los miembros del Consejo del Poder Judicial se les escapa ese concepto tan esencial como el de 'mandato'. Los ciudadanos han votado con plena conciencia de la crisis económica y el paro masivo que ha producido. La suficiencia de la mayoría que debía tener el Gobierno ha sido también un asunto presente en la campaña y en el debate electoral. De la decisión popular ha salido una mayoría clara que se extiende, con pocas excepciones, a todas las instancias del poder territorial. Impulsar las reformas no es una opción. Es un compromiso sellado democráticamente en el que los ciudadanos han cumplido su parte concediendo al Partido Popular el apoyo necesario para hacerlo.

De hecho, el Gobierno de Rajoy es con diferencia el Gobierno más sólido, estable y representativo de la Unión Europea. Frente a la mayoría de prestado de Monti en Italia, la coalición de conservadores y liberales en Gran Bretaña, los aprie-

tos electorales que afronta Sarkozy y las dificultades internas de Merkel, el Partido Popular ha recibido un capital de poder que, ponderado en su conjunto, no tiene precedentes. Medido con este rasero, el escrutinio internacional de la actuación del Gobierno será al menos tan exigente como el juicio de los ciudadanos.

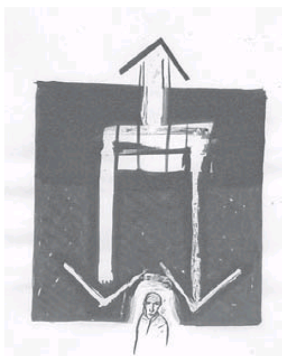
El programa que el PP presentó a la sociedad española, respondido con el mandato democrático que ésta le ha dado, es el contrato político del que el Gobierno habrá de responder. El alcance de los objetivos y compromisos que el Gobierno ha adquirido apunta a una responsabilidad tomada en serio.

Dos objeciones quieren oponerse a algo tan sano como que un Gobierno que puede hacerlo se proponga dar cumplimiento a su programa. La primera es la habitual arrogancia de la izquierda que, a pesar de su clamoroso fracaso, insiste en la pretensión de imponer el paradigma político. Según esto, la derecha puede gobernar ocasionalmente pero solo como gestora mientras a la izquierda corresponde dictar las verdaderas transformaciones políticas sin posibilidad de vuelta atrás. Y por eso, el discurso de la oposición busca descalificar como «contrarreformas» un conjunto de iniciativas,

bien templadas y explicadas por cierto, pensadas algunas de ellas para revertir el gusto del anterior Gobierno por llevar a la ley sus fijaciones ideológicas más radicales. Da la impresión de que ahora en la oposición como antes en el Gobierno los socialistas buscan refugio en el dogmatismo ideológico como sustitutivo a su pobreza programática. Valga como expresión de ello, la grotesca amenaza de revisar los acuerdos con la Iglesia si el Gobierno no desiste de las reformas anunciadas.

Y luego está el consenso. No se puede aceptar como principio que haya

que elegir entre el acuerdo y el cumplimiento de los compromisos. Ampliar los apoyos de las medidas propuestas, especialmente en medio de situaciones como la que sufre el país, es una búsqueda constructiva y una buena pedagogía. Pero no es una alternativa a la responsabilidad de dirección política que compete al Gobierno ni puede aceptarse como un argumento para vaciar de contenido el sentido de una mayoría política claramente expresada en las urnas. El esfuerzo de consenso debe empezar –y así lo ha hecho– por dejar atrás una política orientada a la exclusión del adversario en cuanto que éste puede resultar alternativa de gobierno en el futuro. Una relación entre el Gobierno y la oposición que supera el afán patológico de exclusión al que respondía la política de las legislaturas socialistas debería encontrar territorios de acuerdo y de colaboración sensata, si es correspondida por parte de la oposición con el reconocimiento del mandato democrático que el PP ha recibido para gobernar.



:: JOSE IBARROLA